

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público



Juzgado Diecinueve Civil Municipal

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).

Proceso Nro.	: 11001-40-03-019-2017-01445-00.
Clase de proceso	: Ejecutivo Singular
Demandante	: Pinturas Every S.A.S.
Demandados	: El Toque del Color E.U.
Asunto	: Sentencia

I. OBJETO A DECIDIR

Procede el Juzgado a proferir la correspondiente sentencia, resolviendo las excepciones de mérito que, en oportunidad propuso el curador designado para representar a la parte demandada, lo anterior de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 278 del Código General del Proceso.

II. ANTECEDENTES

a).- Demanda:

PINTURAS EVERY S.A.S., por intermedio de apoderado, presentó demanda contra EL TOQUE DEL COLOR E.U., para obtener el pago de las sumas de dinero contenidas en las facturas de venta No. 19728 MA, No. 21337 MA y No. 21338 MA, aportadas como base de la acción.

b).- Admisión y Contestación:

1.- Asumido el conocimiento de la demanda que desata la presente litis, el Juzgado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 422 del Código General del Proceso, libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva a favor PINTURAS EVERY S.A.S., y en contra de EL TOQUE DEL COLOR E.U., para que en el término de cinco (5) días, contados a partir de la notificación de dicha determinación, cancelara las sumas indicadas en la orden de apremio.

2.- Atendiendo que no fue posible notificar personalmente al extremo demandado, mediante proveído del 21 de febrero de 2020 (fl.55) se ordenó el emplazamiento de la sociedad ejecutada.

3.- De conformidad con lo previsto en el art. 108 del C. G. del P., por secretaria se efectuó la correspondiente inclusión en el Registro de Personas Emplazadas (fl.57)

4.- Transcurrido el término del emplazamiento previsto en el art. 108 del Código General del Proceso, sin que compareciera el extremo demandado a hacerse parte en el presente proceso, por auto de fecha 26 de octubre de 2021 (fl.58) el Juzgado designó curador *ad-litem*, no obstante, atendiendo que los auxiliares de la justicia designados algunos manifestaron su imposibilidad de aceptar el cargo y otros no comparecieron, fueron relevados, finalmente a través de proveído del 29 de junio de 2021 (fl.109), fue nombrando para tal fin el abogado HERNÁN GIOVANNI MARTÍNEZ SOTO, quien se notificó personalmente del mandamiento de pago, el 24 de septiembre de 2021 (fl.111).

5.- Dentro del término de traslado el curador formuló las excepciones de mérito de **(i)** cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación, **(ii)** inexistencia de fundamento de hecho que permita aplicar norma de derecho alguna, **(iii)** inexistencia de derecho legalmente protegible, **(iv)** buena fe de su representada, **(v)** prescripción y **(vi)** la genérica.

6.- De los medios exceptivos propuestos, se ordenó correr traslado, no obstante, la parte actora guardó silencio.

7.- Así pues, surtido el traslado de las excepciones de mérito “el juez citará a la audiencia prevista en el artículo 392, cuando se trate de procesos ejecutivos de menor cuantía [Núm. 2 artículo 443].

Bajo ese entendido, el artículo 3° del nuevo ordenamiento jurídico, consagra como principio del régimen procedimental que “las actuaciones se cumplirán en forma oral, pública y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o estén amparadas por reserva”; disposición que se acompasa con lo establecido en el art. 278 *ejusdem*, el cual contempla igualmente que, el Juez podrá dictar sentencia anticipada, en cualquier estado del proceso, en los siguientes eventos: “2. Cuando no hubiere pruebas por practicar.”, supuestos que de contera conllevan a la pretermisión de etapas procesales establecidas para su cumplimiento, mismas que, sin embargo y, en aplicación a los principios de celeridad y por economía procesal, el legislador previó los eventos en los que se puede obviar su realización¹.

¹ CSJ Civil, 15/Agosto/2017, Rad. 11001-02-03-000-2016-03591-00, Luis Alonso Rico Puerta, posición reiterada en sentencia por la CSJ Civil, 3/Noviembre/2017, Rad. 11001-02-03-000-2017-01205-00, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.

Así pues, revisado el asunto bajo análisis, observa el Juzgado que las documentales obrantes en el expediente son suficientes para resolver de fondo el asunto, amén que ninguna de las partes solicitó el decretó de otras diferentes a las ya obrantes en el proceso, por lo tanto, no se considera necesario decretar y practicar otras pruebas, razón por la que encontrándose vencido el traslado de la demanda, se procederá a dictar sentencia por escrito.

III. PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico a resolver en este caso es determinar si se debe ordenar seguir adelante la ejecución por reunirse los requisitos para ello, o si los medios exceptivos propuestos por la pasiva, logran enervar las obligaciones contenidas en los títulos báculo de la acción ejecutiva.

IV. CONSIDERACIONES

1.- En el presente asunto no existe la posibilidad de formular objeción alguna respecto de la presencia de los presupuestos jurídico-procesales requeridos para la correcta conformación del litigio, toda vez que se cuenta con una demanda correctamente formulada; con la capacidad de las partes para obligarse y para comparecer al proceso, así como con la competencia del esta juzgadora para definir el asunto dejado a su consideración, atendiendo el factor objetivo de la cuantía.

2.- Se observa que los elementos de la acción ejecutiva se presentan sin ambigüedad alguna, ya que los documentos presentados como base de las pretensiones cumplen con las exigencias generales y particulares establecidas en los artículos 621, 772 y siguientes del estatuto mercantil, que además de dar contener obligaciones claras, expresas y exigibles provenientes del deudor, constituyen plena prueba en su contra, lo que autoriza a la parte demandante para formular la acción cambiaria por la vía ejecutiva al tenor del precepto 422 de la normatividad procesal civil. Igualmente, goza de la presunción de autenticidad, tal como lo disponen los cánones 244 ibídem y 793 del Código de Comercio.

3.- Ahora, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 619 del estatuto mercantil: *"Los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de participación, y de tradición o representativos de mercancías."*, norma en virtud de la cual debemos desarrollar el principio de la literalidad que delimita el contenido, la extensión y la modalidad del derecho que se incorpora en el título valor. Sin embargo, el obligado cambiario puede invocar en su defensa las excepciones establecidas en el Art. 784 del C. de Co.

4.- El extremo pasivo por intermedio de *curador ad-litem*, propuso las excepciones que denominó **(i)** cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación, **(ii)** inexistencia de fundamento de hecho que permita aplicar norma de derecho alguna, **(iii)** inexistencia de derecho legalmente protegible, **(iv)** buena fe de su representada, **(v)** prescripción y **(vi)** la genérica.

5.- En ese orden de ideas, y por economía procesal, se procederá a resolver de manera conjunta las excepciones de **(i)** cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación, **(ii)** inexistencia de fundamento de hecho que permita aplicar norma de derecho alguna, **(iii)** inexistencia de derecho legalmente protegible, **(iv)** buena fe de su representada.

Descendiendo al asunto objeto de estudio, y de los argumentos expuestos por el curador de la ejecutada, se advierte que éste tan solo refiere, a su juicio, la supuesta inexistencia de causa y pruebas para demandar, igualmente a la obligación de reconocer algún derecho, ni la existencia de un fundamento de hecho que ampare la pretensión de la parte demandante y finalmente a la buena fe de la parte que representa.

Por su parte la ejecutante, dentro de la oportunidad para descorrer traslado de las señaladas excepciones, guardo silencio.

Así que corresponde al Despacho analizar si en realidad la defensa esta llamada a prosperar o no.

En primer lugar, debe señalarse, que el proceso ejecutivo por su naturaleza, inicia con un título base que contiene el derecho que, en esencia, es tenido por cierto o que es ya reconocido, directamente por el ejecutado o ya por la fuerza ejecutiva de algunos documentos que consagra la Ley, como, por ejemplo, las facturas que se expiden al momento de efectuar la compra de algún artículo o la prestación de un servicio.

De ahí que, este litigio se inicie con una orden de pago, pues la pretensión se presume, es cierta, basada en un derecho estructurado, que se señala como insatisfecho y que por ello amerita la intervención del juez para su cumplimiento.

Por esa razón, ante la presunción de certeza que trae consigo el proceso ejecutivo respecto del derecho que en él se reclama, es que, en su procedimiento, no se acepta que en la contestación de la demanda se haga un simple desconocimiento del derecho o de los hechos que le sirven de base a la demanda, sino que se exige la proposición de excepciones de mérito.

Entendidas éstas, en términos del Maestro Hernando Morales Molina, como *“todo que pueda desconocer la existencia de la obligación o declararla extinguida si alguna vez existió y afectan el fondo mismo del asunto (...) por lo cual quedan comprendidas las que algunos expositores denominan temporales (petición de modo indebido, petición antes de tiempo, de contrato no cumplido, etc) y perpetuas, con su división consistente en que desconocen la existencia de la obligación (nulidad, dolo, error, fuerza, simulación, ect.) y las que la declaran extinguida si alguna vez existió (pago, remisión, compensación, transacción, etc)”*.

Sentado lo anterior, se advierte que en el caso las excepciones propuestas más allá de atacar en realidad la existencia de la obligación, lo que solicita es que el demandado, aún a pesar de tener un título ejecutivo, demuestre que su deudora ha incumplido, situación que es ajena a una excepción de mérito en un litigio de cobro, pues como se advirtió, su derecho ya está demostrado y por ende, lo que corresponde a la contraparte es desvirtuar la existencia del mismo, lo que no se logra reclamando la prueba del incumplimiento.

Y es que pretende el curador *Ad – litem* de la demanda en su defensa, que se demuestre que ella incumplió su obligación, cuando lo cierto es que el dicho de su contraparte de que ella no atendió sus cargas, por ser una negación indefinida de conformidad con lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso, no requiere prueba.

Al respecto, cabe recordar que la Corte ha señalado frente a las negaciones:

“éstas se dividen en definidas e indefinidas, siendo las primeras aquéllas que tienen por objeto hechos concretos, “limitados en tiempo y lugar, que presuponen la existencia de otro hecho de igual naturaleza, el cual resulta afirmado implícita o indirectamente”, las segundas, en cambio, “no implican, ni indirecta ni implícitamente, la afirmación de hecho concreto y contrario alguno”.

Para las primeras, el régimen relacionado con el deber de probarlas continua intacto “por tratarse de una negación apenas aparente o gramatical”; las segundas, “son de imposible demostración judicial, desde luego que no implican la aseveración de otro hecho alguno”, de suerte que éstas no se pueden demostrar, no porque sean negaciones, sino porque son indefinidas. (CSJ Sala de Casación Civil, sentencia 13 de julio de 2005 Expediente. 00126.)

De manera que, es la demandada quien soporta la carga de la prueba frente a que *“el demandado se ha negado sistemáticamente al pago de las obligaciones en comento”*, pero lo cierto es que la curadora *Ad-litem*, quien propuso la defensa se limitó a aseverar, que no existe una causa para demandar a su representada, así como a alegar la inexistencia de la obligación de reconocer algún derecho; por lo debe padecer la consecuencia jurídica prevista en la norma sustancial, esto es, que no haya desvirtuado el derecho contenido en el título ejecutivo, pues no existe

en el expediente ningún medio de convicción con el que se establezca que, en efecto la ejecutada no está obligada a sufragar los dineros que adeuda y que se encuentran contenidos en las facturas arrimadas como base de la acción.

De ahí que, en el proceso ejecutivo, como es el que acá se está tramitando, tal como se señaló en precedencia, corresponde a la parte acreditar que en efecto el derecho contenido en el título ejecutivo no es claro, expreso o exigible, concretamente, correspondía a la pasiva que no recibió los productos relacionados en las facturas, o en la cantidad ahí especificada o que la obligación ya fue cancelada, a efectos de que el Despacho pudiera relevarla de su carga de pagar el importe de las mismas, no obstante, ninguna prueba al respecto se allegó.

Finalmente, con relación a la buena fe la demandada, debe decirse que la misma se presume, *contrario sensu*, la mala fe ha de probarse, sin embargo, en el asunto puesto a consideración del despacho, su defensa no pasa de ser un simple alegato sin asidero jurídico

Sean las anteriores razones suficientes por las cuales se negarán los medios exceptivos propuestos.

6.- Superado lo anterior, procede el despacho a abordar el estudio de la excepción propuesta por la parte demandada denominada **“PRESCRIPCIÓN”**.

Frente a tal excepción, es de advertirse que el fenómeno de la prescripción puede acogerse a través de dos conceptos diferentes, de un lado como un modo adquirir el dominio de las cosas pues en virtud de la posesión por un período determinado y con el cumplimiento de los requisitos legales exigidos, se obtiene el derecho real de los bienes ajenos corporales, raíces o muebles que se encuentran en el comercio humano, de otro lado, como una forma de extinguir las acciones y derechos personales, cuando éstos no se han ejercido en un lapso considerable determinado por el legislador, denominándose prescripción extintiva o liberatoria sin que ello implique que se encuentre en discusión la titularidad de las cosas. De manera que para que sea aplicable la figura en comento se requiere: **(i)** El transcurso del tiempo, **(ii)** inactividad del acreedor, **(iii)** alegarse expresamente, pues no opera de oficio sino a solicitud de parte y, **(iv)** que no se haya renunciado, suspendido o interrumpido el término de prescripción, sobre el particular la Corporación en cita ha señalado que:

“La prescripción liberatoria o extintiva de derechos personales es un modo de extinguir los derechos y las acciones a consecuencia del transcurso de un lapso predeterminado en la ley, sin que el titular de esos derechos y acciones los haya ejercido. Su consolidación se supedita a que la acción sea prescriptible, que es la regla general, a que transcurra el tiempo legalmente establecido teniendo en consideración la interrupción y suspensión de que puede ser objeto; y a que el

titular del derecho de acción se abstenga en ese tiempo de ejercer el derecho en la forma legalmente prevenida.

La prescripción extintiva puede ser de largo o corto tiempo, y sobreviene con el cumplimiento de los requisitos mencionados, pero al paso que la primera exige el transcurso de diez años (en el caso de la ordinaria y cinco en la ejecutiva la segunda)²

Ahora bien, la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia, en reiteradas oportunidades al interpretar las normas que regulan el término extintivo, ha señalado que dicho plazo no opera de manera automática, sino que debe observarse desde una perspectiva subjetivista, cuyo fin es el de evitar las consecuencias nocivas de demandas que se interponen con premeditada tardanza, pero también la extinción de derechos sustanciales, por causas no atribuibles a quien legítimamente los reclama, así:

“... la interrupción civil – tiene dicho la Corte- de la prescripción tanto adquisitiva como extintiva, a consecuencia de la interposición de la demanda no se consuma con la sola presentación de la demanda, sino en el momento en el que se notifica al demandado, salvo que el retardo en notificar a este no se deba a culpa del demandante, por no haber realizado la actividad necesaria para que dicha notificación se efectuara, sino al demandado, por haber eludido esta, o al personal del juzgado encargado de hacerla, casos estos en los cuales la interrupción se entiende consumada con la presentación de la demanda” (subrayas y negrillas fuera de texto) (G.J. números 2032, pág. 634 y 658; 2050 pág. 660; 2154, pág 132; 2318, pág. 120)”

“Es decir, que si a pesar de la diligencia del actor, el auto admisorio de la demanda no logra notificarse en tiempo a los demandados debido a evasivas o entorpecimiento de estos o por demoras de la administración de justicia o de otro tipo, que no sean imputables al reclamante, el ejercicio oportuno de la acción con la presentación de la demanda tiene la virtud de impedir que opere la caducidad. Este criterio conserva plena vigencia, por estar inspirado en los supremos ideales de justicia y equidad, adaptados al derecho objetivo, a tal punto que a pesar de la doctrina antigua consideró que el concepto de caducidad estaba ligado a la idea de plazo extintivo e improrrogable – cuyo vencimiento produce el decaimiento de la acción de manera inevitable y sin tomar en consideración la actividad del juez o de las partes-, ello no fue obstáculo para que esa noción eminentemente teórica o especulativa cediera su rigor ante los supuestos concretos que plantea la realidad que está a la base del derecho actual”³

Igualmente, el artículo 2513 del Código Civil consagra que “*El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio*”, y de conformidad con el artículo 2535 del mismo código, la prescripción que extingue las acciones o derechos de otros, exige sólo el transcurso de cierto tiempo que, en cada caso, es fijado expresamente por el legislador.

² Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil SC6575-2015 M.P. Jesús Vall de Ruten Ruiz.

³ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, STC14529-2018, M.P. Ariel Salazar Ramírez.

Es así como el artículo 789 del Código de Comercio, establece en tres (3) años el término prescriptivo de la acción cambiaria directa, contabilizados a partir del día de vencimiento.

Para el caso *sub-examine*, debe tenerse en cuenta que, el inciso primero del artículo 94 del Código General del Proceso es claro al señalar que: “La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquella, o el de mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término, los mencionados efectos sólo se producirán con la notificación al demandado.” (Subrayado y negrillas fuera del texto).

7.- En el asunto objeto de análisis, se evidencia que la ejecución se encuentra respaldada en el ejercicio de la acción cambiaria con la finalidad de obtener el pago del derecho crediticio incorporado en las facturas de venta No. 19728 MA, No. 21337 MA y No. 21338 MA, aportadas como base de la acción, las que una vez revisadas revelan como fecha de vencimiento:

a).- Factura de venta No. 19728 MA: fecha de vencimiento 19 de noviembre de 2016, el período prescriptivo estaría llamado a establecerse el 19 de noviembre de 2019.

b).- Factura de venta No. 21337 MA: fecha de vencimiento 28 de enero de 2017, el período prescriptivo estaría llamado a establecerse el 28 de enero de 2020.

c).- Factura de venta No. 21338 MA: fecha de vencimiento 28 de enero de 2017, el período prescriptivo estaría llamado a establecerse el 28 de enero de 2020.

8.- Es necesario advertir que, el Art. 2539 del Código Civil dispone: *“La prescripción que extingue las acciones ajenas, puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente. Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente.”*

9.- Sin embargo, la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia, en reiteradas oportunidades al interpretar, las normas que regulan el término extintivo, ha señalado que dicho plazo no opera de manera automática, sino que debe observarse desde una perspectiva subjetivista, cuyo fin es el de evitar las consecuencias nocivas de demandas que se interponen con premeditada tardanza, pero también la extinción de derechos sustanciales, por causas no atribuibles a quien legítimamente los reclama, así:

“... la interrupción civil – tiene dicho la Corte- de la prescripción tanto adquisitiva como extintiva, a consecuencia de la interposición de la demanda no se consume con la sola presentación de la demanda, sino en el momento en el que se notifica al demandado, salvo que el retardo en

notificar a este no se deba a culpa del demandante, por no haber realizado la actividad necesaria para que dicha notificación se efectuara, sino al demandado, por haber eludido esta, o al personal del juzgado encargado de hacerla, casos estos en los cuales la interrupción se entiende consumada con la presentación de la demanda” (G.J. números 2032, pág. 634 y 658; 2050 pág. 660; 2154, pág 132; 2318, pág. 120)”

“Es decir, que si a pesar de la diligencia del actor, el auto admisorio de la demanda no logra notificarse en tiempo a los demandados debido a evasivas o entorpecimiento de estos o por demoras de la administración de justicia o de otro tipo, que no sean imputables al reclamante, el ejercicio oportuno de la acción con la presentación de la demanda tiene la virtud de impedir que opere la caducidad. Este criterio conserva plena vigencia, por estar inspirado en los supremos ideales de justicia y equidad, adaptados al derecho objetivo, a tal punto que a pesar de la doctrina antigua consideró que el concepto de caducidad estaba ligado a la idea de plazo extintivo e improrrogable – cuyo vencimiento produce el decaimiento de la acción de manera inevitable y sin tomar en consideración la actividad del juez o de las partes-, ello no fue obstáculo para que esa noción eminentemente teórica o especulativa cediera su rigor ante los supuestos concretos que plantea la realidad que está a la base del derecho actual”⁴. (Subrayas fuera de texto)

De ahí que la correcta interpretación de la norma que rige el caso impone al juez la obligación de tomar en consideración las referidas circunstancias subjetivas, a fin de no endilgar a la parte demandante unas consecuencias nocivas que no le son en modo alguno atribuibles por no ser producto de su negligencia⁵.

10.- A efectos de desatar la excepción que es materia del debate por la parte demandada, debe compararse la fecha de vencimiento de las obligaciones que se cobran, la fecha de presentación del libelo y cuál hipótesis de las contenidas en el artículo 94 reseñado se cumple, según la fecha de notificación del mandamiento ejecutivo al demandado, así como si la tardanza en las notificaciones, fue o no por la negligencia del acreedor.

De acuerdo con la literalidad de los títulos aportados como base de recaudo y el escrito genitor, se tiene que, la fecha de vencimiento de los títulos valores fueron en las que el demandante declaró vencido el plazo, siendo estas, las fechas que se indicó en precedencia.

A su vez, la demanda que desató la litis fue presentada el 18 DE DICIEMBRE DE 2017 (Acta individual de reparto folio 14), y se libró orden compulsiva el 22 de enero de 2018, notificándose ésta última por estado del 23 de enero de la misma anualidad (fl.16 fte y vto), de manera que la interrupción solo operaría si, el acto de intimación se presentara dentro de

⁴ Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil – STC14529-2018 Radicación n. 11001-02-03-000-2018-02989-00 del 7 de noviembre de 2018 M.P Ariel Salazar Ramírez.

⁵ Sentencia de Casación SC5755-2014, dictada el 9 de mayo de 2014 dentro del radicado 11001-31-10-013-1990-00659-01

⁵ Folios 8 a 9 cuaderno principal

esa anualidad, es decir, **hasta el 23 de enero de 2019**, circunstancia que solo se perfeccionó hasta el 24 de septiembre de 2021 a través de curador ad-litem (fl.111), lo que de suyo permite concluir que para la fecha de notificación a la parte convocada, las obligaciones ya se encontraban afectadas por el fenómeno de la prescripción que había operado el 19 de noviembre de 2019 y el 28 de enero de 2020 respectivamente.

Y pese a que la presentación de la demanda se efectuó antes del vencimiento del lapso prescriptivo, lo cierto es que la acreedora, no cumplió con la carga de intimar a la ejecutada dentro del término legal dispuesto en el artículo 94 del estatuto procesal, sin que pueda atribuirse tal tardanza a la administración de justicia o cualquier otra circunstancia para que fuese dable aplicar en el caso concreto un criterio subjetivo.

Lo anterior, porque incluso para la fecha en que se solicitó el emplazamiento de la sociedad demandada 26 de noviembre de 2019 (fl.46), el lapso señalado para el enteramiento ya había fenecido con relación a la factura de venta No. 19728 MA, acotando que, si bien es cierto respecto a las factura de venta No. 21337 MA y No. 21338 MA, el mismo aún no se configuraba para esa data, solo atendiendo la solicitud elevada mediante memorial presentado el 4 de febrero de 2020 (fl.54), fue posible ordenar el emplazamiento de la parte ejecutada, en tanto con anterioridad, el Despacho realizó una serie de requerimientos, en razón a que los trámites de notificación no fueron realizados en debida forma, amén que entre el auto calendado 2 de agosto de 2018 (fl.26) a la fecha en que se profirió el auto del 20 de agosto de 2019 (fl.31), por medio del cual se requirió a la parte ejecutante para que notificara a la pasiva, so pena de dar aplicación a la sanción prevista en el art. 317 *ejusdem*, transcurrió un año de inactividad en punto a las diligencias de notificación.

10. En ese orden de ideas, la excepción de prescripción esta llamada a prosperar y así será declarado en la resolutive, en consecuencia se declarará terminado el litigio.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto anteriormente, el Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Bogotá, D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO.-DECLARAR INFUNDADAS las excepciones de **(i)** cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación, **(ii)** inexistencia de fundamento de hecho que permita aplicar norma de derecho alguna, **(iii)** inexistencia de derecho legalmente protegible y **(iv)** buena fe de su representada, propuestas por el extremo demandado, de

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión judicial.

SEGUNDO.- DECLARAR FUNDADA la excepción de “PRESCRIPCIÓN” alegada por el extremo ejecutado, de acuerdo con lo esbozado en la parte considerativa.

TERCERO.- DECLARAR terminado el proceso de la referencia,

CUARTO.- DECRETAR EL LEVANTAMIENTO de las medidas cautelares decretadas y practicadas dentro del proceso. Librense los oficios respectivos, en caso de existir embargo de remanentes, lo desembargado deberá ponerse a disposición de la autoridad que lo solicitó.

QUINTO.- CONDENAR en costas y perjuicios a la parte ejecutante a favor de la ejecutada, las cuales serán liquidadas en su oportunidad por la secretaría. Inclúyase por concepto de agencias en derecho para las primeras, la suma de \$2'000.000. Para los segundos, procédase de conformidad a lo previsto en el artículo 283 del Código General del Proceso.

SEXTO.- ORDENAR el desglose del documento base de ejecución a favor de la parte actora con la constancia que la obligación terminó por prescripción.

SÉPTIMO.- Efectuado lo anterior, **archívense** las presentes diligencias.-

Notifíquese y Cúmplase⁶

IRIS MILDRED GUTIÉRREZ

Juez

A.M.C.B.

⁶ Esta providencia se notificó por estado No. 142 de 10 diciembre de 2021.

Firmado Por:

**Iris Mildred Gutierrez
Juez Municipal
Juzgado Municipal
Civil 019
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **09fccfe29946d5cd049eaab4d8b68cb0133dd563b14bf4606c6e342adfc1868c**

Documento generado en 09/12/2021 04:08:08 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>